

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-12761-2023  
CARATULADO : ORTEGA/CONSEJO DE DEFENSA DEL  
ESTADO

Santiago, dieciocho de Junio de dos mil veinticuatro

**VISTO:**

A folio 1, comparecen don Mario Armando Cortez Muñoz, cédula de identidad N°6.266.674-9, y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas cédula de identidad N°15.360.742-7, abogados, en representación de don **JOSÉ GABRIEL ORTEGA SOTO**, cédula de identidad N°6.010.586-3, chileno, casado, pensionado, domiciliado para estos efectos en Arturo Prat N°407, depto. 501, comuna de Santiago, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por don Raúl Letelier Wartenberg, cédula de identidad N°12.695.549-9, abogado, ambos domiciliados en Santiago, calle Agustinas 1225, Piso 4, de esta ciudad.

Funda su pretensión en que su representado fue objeto de torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes, lo cual se encuentra recogido en el Registro de la Comisión de Prisión Política y Tortura elaborado por las Comisiones Nacionales sobre Prisión Política y Tortura.

Principia su relato señalando que en el año 1985, en Talca, y mientras cumplía tareas de activista por orden del Sindicato de la construcción de Valparaíso, fue detenido por quienes se identificaron como miembros de la Policía de Investigaciones, lo redujeron, le pusieron una capucha y lo trasladaron a un centro de reclusión, donde un oficial se identificó como miembro de la CNI, y lo acusaba de pertenecer y ser jefe de logística del grupo FPMR, y al negarlo, fue golpeado brutalmente. Luego de eso, lo amarraron a una silla, donde quedaron únicamente libres sus



**Foja: 1**

manos, le pusieron cables eléctricos, y ante cada negativa que daba a sus preguntas, le aplicaban una descarga en las manos. Una vez terminado dicho interrogatorio, lo trasladan y lo esposan a un catre, donde luego de un rato, se queda dormido. Al despertar, comenzaba un nuevo interrogatorio, siendo éste más violento que el anterior, llegando incluso uno de los interrogadores a tirarlo al suelo y a patearlo agresivamente, reventándole el ojo izquierdo, y desmayándose producto de los golpes en la cabeza que recibió.

Prosigue su relato, señalando que al tercer o cuarto día, llegaron unas personas quienes le sacaron la venda que mantenía en los ojos, identificándose como oficial del ejército, quien le indicó suavemente que mejor cooperara, ya que ellos, sabían que él había recibido instrucción militar en cuba, y por lo tanto era terrorista, país donde nunca estuvo.

Afirma, que otra de las torturas recibidas, en varias oportunidades, fue que lo desnudaban y le aplicaban sacos calientes de papas en su espalda, recibiendo, además, en forma rítmica, golpes en la espalda; otras veces, lo grababan leyendo un papel, que correspondía a una confesión, en su calidad de terrorista, grabaciones que duraban extensamente. En otras ocasiones, lo careaban con otra persona, que desconocía, y quien le decía que confesara su participación, ya que todos estaban detenidos, y no valía la pena sufrir tanto.

Recuerda otra vez, que lo sacaron de la cama, y lo llevaron a un lugar amplio, donde lo hicieron formarse con más personas, y donde al frente había una mesa con diversas armas y material explosivo. Algunas personas de las que estaban al lado de la mesa grababan, y otras los apuntaban con armas, y además eran acusados de ser los terroristas que habían cometido los hechos acaecidos en la Séptima Región. Después de ello, fueron subidos a un vehículo de Gendarmería, y trasladados a la Fiscalía Militar de Talca, en donde los mantuvieron esposados y sentados en el suelo, siendo finalmente declarados reos y enviados a la cárcel de Talca, donde son incomunicados, por no sabe cuánto tiempo. Luego, es llevado a la Corte Penal de Talca, donde le se le informó que era acusado de hechos terroristas, y que debía firmar dicha acusación, y al negarse, le dijeron que lo devolverían a la CNI, ante lo cual se vio obligado a firmar el documento.



**Foja: 1**

Una vez firmado el documento, es devuelto a la cárcel, donde luego de haber mucha desconfianza hacia él, por parte del resto de los reos, todo mejoró con el tiempo.

Con el paso del tiempo, comenzó a sentir dolores en su cuerpo, sobre todo en su ojo izquierdo, lo revisó personal de la Cruz Roja Chilena, siendo recomendado por éstos que lo viera un profesional, lo que nunca ocurrió.

Agrega, que su situación judicial nunca fue atendida sino hasta seis meses desde que comenzaron los hechos. Asimismo, afirma que luego de permanecer por cuatro años en la cárcel de Talca, pidió su traslado en el año 1989, hacia la cárcel de Valparaíso, siendo liberado desde allí, recién en el año 1999, por orden de la Corte de Apelaciones.

Finaliza su relato, señalando consecuencias importantes posteriores a su libertad, entre las cuales se encuentran el haber perdido la casa familiar, la pérdida de su ojo izquierdo, la declaración de insuficiencia pulmonar y enfisema pulmonar, dolores de cabeza recurrentes, la limitación de poder trabajar, a raíz de sus antecedentes, y el verse obligado a aceptar la propuesta de sus hermanos de radicarse en Canadá, donde vivía uno de sus hermanos.

Respecto a los fundamentos jurídicos de su acción, alude que debe ser indemnizado, luego de años de soportar la injusticia y el desamparo. Sostiene, que el Estado de Chile es civilmente responsable, ya que los autores de los hechos descritos eran miembros de Policía de Investigaciones. Agrega, que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en los hechos de secuestro y tortura ocurridas durante la dictadura militar, mediante distintos instrumentos jurídicos y que la Responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo en razón del hecho propio, al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos. Agrega que la responsabilidad del Estado se encuentra consagrada tanto en la Constitución Política como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Indica que en el caso de autos se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados, esto, ya que el daño moral se presume, la acción u omisión correspondió a órganos del Estado a través de sus agentes, quienes lo torturaron, como se expuso con anterioridad,



Foja: 1

asimismo el nexo causal entre el daño y la perpetración del delito civil es evidente y finalmente no existen causales eximentes de responsabilidad en favor del estado, así como también se ha declarado reiteradamente que dichos crímenes tienen el carácter de imprescriptibles, como lo reconoce la comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes realizan las respectivas recomendaciones al Estado de Chile, y en favor de no acoger la prescripción, y asegurar una garantía real de no repetición, conforme se viene resolviendo en forma sostenida y permanente, desde el año 2015 por los Tribunales de Justicia Chilenos.

Previas citas legales, normativa y jurisprudencia, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, y en definitiva, condenar a la parte demandada a pagar a título de daño moral la suma de **\$300.000.000.- (trescientos millones de pesos)**, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las misma, o el monto que el Tribunal estime ajustado a derecho, la equidad y el mérito de autos, con costas.

**A folio 7**, consta notificación personal subsidiaria de la demandada, con fecha 1 de septiembre de 2023.

**A folio 8**, la demandada contestó el libelo enderezado en su contra, pidiendo su rechazo. Previa síntesis de los hechos de la demanda, opuso las excepciones de reparación integral, y en subsidio, la excepción de prescripción extintiva, cuyos fundamentos fueron planteados de manera principal y subsidiaria.

En cuanto a la **excepción de reparación integral**, alega la improcedencia de la pretensión del actor, porque ya habría sido indemnizado. Principia efectuando una relación del marco general de las reparaciones ya otorgadas, dentro de la denominada “Justicia transicional”, indicando que dentro de un concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. De esta forma, estos programas incluirían beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, según quedó plasmado en la Ley N°19.123 y otras



Foja: 1

normas jurídicas conexas, las cuales describe en extenso. Añade, que existe identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, puntualizando que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables, por lo que las pretensiones acá indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Subsidiariamente, deduce **excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios** con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo. Funda su defensa en que conforme el relato de la parte demandante, las detenciones y torturas sufridas por éste ocurrieron entre el año 1985 y hasta abril de 1999, por lo que, suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973,-- por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia,--a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 1 de septiembre de 2023, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Así las cosas, concluye que el plazo de 4 años establecido por la norma citada ha transcurrido con creces. Sin perjuicio de ello, y para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, viene en oponer la **excepción de prescripción extintiva de 5 años** contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, fundada en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles ejercidas en este pleito, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Refrenda su defensa con jurisprudencia y normas de derecho internacional, señalando particularmente que no habiendo norma expresa de derecho



Foja: 1

internacional de Derechos Humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no siendo posible aplicar por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, procede el rechazo de la demanda por la prescripción de la acción civil.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, viene en formular alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido, que se expondrán a continuación.

Sostiene, que tratándose del daño puramente moral, la finalidad de restablecimiento del equilibrio destruido por el hecho ilícito no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, por cuanto el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y en tanto la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba, razón por la cual la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

De tal forma, y en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción opuestas, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, conforme a la Ley N°19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Además, respecto de los intereses y reajustes, postula su improcedencia, toda vez que, si bien el actor solicita su pago desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de las sumas indemnizatorias, a la fecha de interposición de la demanda de autos, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no existe obligación alguna de indemnizar de parte de su representada, no existiendo de esta forma suma alguna que reajustar. Del mismo modo, esgrime respecto de los intereses que el artículo 1551 del Código Civil establece



Foja: 1

expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de una sentencia. Por lo anterior, concluye que en el hipotético caso en que se acogieren las acciones de autos y se condenare a su representado al pago de una suma indemnizatoria, sus reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

**A folio 11 y 13**, se evacuan los trámites de réplica y dúplica, respectivamente.

**A folio 21**, se recibió la causa a prueba.

**A folio 30**, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, don **JOSÉ GABRIEL ORTEGA SOTO** interpuso demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, los que se tienen por reproducidos.

**SEGUNDO:** Que, la demandada al contestar la acción dirigida en su contra solicitó su total rechazo, con costas, por los fundamentos expresados precedentemente, oponiendo además las excepciones referidas en los párrafos anteriores.

**TERCERO:** Que, en apoyo a su pretensión, la parte demandante produjo la siguiente prueba, la que no fue objetada por la contraria:

**Instrumental:**

**A folio 22:**

1.- Copia extracto de Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, específicamente el Capítulo II Título II.

2.- Copia presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, en el cual señala las Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos.



Foja: 1

3.- Copia, informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar, elaborado por PRAIS y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

4.- Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltrán P., de fecha 30 de junio de 2017.

5.- Copia de informe denominado, Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, realizado por la Vicaria de la Solidaridad, N°2958.

6.- Copia, informe denominado Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, realizado por la Vicaria de la Solidaridad, Documento N°006560 (Programa de salud).

7.- Copia de informe denominado: Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad, de abril de 1987.

8.- Copia de informe denominado: Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad.

9.- Copia de informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado: Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas.

10.- Estudio denominado Consecuencias Psicosociales de la Represión Política, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.

11.- Capítulo III (3) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, el que se encuentra compuesto por los siguientes títulos: Introducción, Concentración de Poderes, Declaración de Estado de Guerra, Consejos de Guerra, El Poder Judicial, El Aparato Represivo, Los Medios de Comunicación, Órganos de Denuncia Internos y Externos, La Reiterada Condena Internacional.





Foja: 1

12.- Capítulo V (5) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Métodos de tortura: definiciones y testimonios, el que se encuentra compuesto por los siguientes títulos: Introducción, Los Métodos, Violencia Sexual Contra las Mujeres.

13.- Capítulo VIII (8) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, compuesto por los siguientes títulos: El Impacto de la Detención, Las Consecuencias en las Víctimas: este título indica lo que significó para las Víctimas de Prisión Política y Tortura, las lesiones y enfermedades que se les produjeron, las consecuencias psicológicas quedadas en ellas, la tortura como experiencia traumática para la víctimas, las consecuencias en las relaciones familiares de las víctimas, las consecuencias en la vida sexual de las víctimas, las consecuencias en los niños y las consecuencias psicosociales de las víctimas, y por último el título Trauma y Duelo.

14.- Copia de Informes denominados: -La Tortura Modelo de Intervención. - La Tortura Un Problema Médico. Ambos emitidos y realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), año 2005.

15.- Copia de Informe denominado: -Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

16.- Sentencia de fecha 29 de noviembre del 2018, correspondiente al CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

17.- Extracto de la nómina de víctimas de prisión política y tortura, elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura en el que figura como víctima calificada por el Estado de Chile el actor de autos, en el Registro N°17.558.

**CUARTO:** Que, a su turno, la **parte demandada** rindió la siguiente prueba, no objetada de contrario.

**Instrumental:**

**A folio 16 y 18:**



Foja: 1

1.- Oficio recepcionado del Instituto de Previsión Social, sin fecha, DSGT N°4792-17203, mediante el cual se informan beneficios de reparación por concepto de Leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874 percibidos por don José Gabriel Ortega Soto, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), requerido por la demandada a folio 8 de autos.

**QUINTO:** Que, en primer lugar, corresponderá hacerse cargo de las excepciones esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar la responsabilidad reclamada en cuanto a la existencia del hecho dañoso, sino que más bien dicen relación con la reparación de los vejámenes de que fue objeto la demandante, como asimismo con la oportunidad en que se solicita la indemnización pedida, y en su caso, con su monto y forma de reajuste.

**SEXTO: En cuanto a la excepción de reparación integral.** Que, el Fisco de Chile debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado alegó como primera excepción la reparación integral de los perjuicios sufridos por el demandante por medio de la entrega de beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N°19.123, 19.234 y N°19.992, que consisten en una pensión anual de reparación para beneficiarios entre los menores de setenta años hasta mayores de setenta años, y el aporte único de Reparación Ley N°20.874 por \$1.000.000.- que recibió el actor, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los Derechos Humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras. En este escenario, alega que existe identidad de causa entre lo que la demandante reclama por concepto de indemnización de perjuicios y las reparaciones realizadas.

Para resolver, es necesario tener en consideración que la acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado incoada en autos tiene por objeto reparar al demandante en los perjuicios sufridos como consecuencia del actuar de funcionarios estatales.



Foja: 1

Dicho lo anterior, nuestro derecho interno regula la acción de indemnización en sede extracontractual por todo daño que sufra una persona, sin distinción alguna, especialmente según el estatuto de normas contenidas en los artículos 2.314, 2.316 y 2.329 del Código Civil, estableciendo que todo daño deber ser reparado íntegramente por quien lo causó.

En este orden de ideas, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado, cuya existencia y monto ha quedado acreditado con el documento incorporado a folio 16 y 18 de autos, constituye a juicio de esta sentenciadora beneficios sociales en dinero tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile referentes a la dignificación de las víctimas y la búsqueda de un reconocimiento de los vejámenes sufridos y una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas, y la obtención, en definitiva, de una democracia plena y paz social, dentro del marco de la denominada “justicia transicional”. En consecuencia, las reparaciones en dinero u otros beneficios percibidos por el actor, como por ejemplo una pensión mensual, que será percibida por aquel de manera vitalicia, si bien constituyen una reparación en su calidad de víctima de violaciones a los Derechos Humanos, no resultan incompatibles con la suma reclamada a título de indemnización de perjuicios, principalmente por que dichos beneficios se aplicaron con estándares y criterios objetivos, en forma genérica, y sin distinción o correlación necesaria con el daño efectivamente padecido por el demandante en particular, por lo que no es posible concluir que los daños causados a éste han sido reparados en su totalidad, especialmente el daño moral, que implica el sufrimiento o dolor que el hecho dañoso ocasiona en el aspecto físico o psicológico a una persona, y por ende, de carácter personalísimo.

Ahora bien, respecto a aquellas reparaciones denominadas como “simbólicas”, estas obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar a los beneficiarios de dichas reparaciones no resultan vinculantes para la procedencia de la indemnización civil, razón por la cual se desestimaré completamente esta defensa de reparación integral del daño.



Foja: 1

**SÉPTIMO: En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.**

Que, en segundo lugar, y de manera subsidiaria, la demandada opuso la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber transcurrido a su juicio con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, contados desde la fecha en que habría ocurrido la detención, privación de libertad y torturas sufridas por el demandante, aun cuando se entienda suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de la excepción de prescripción extintiva de 4 años, invocó la **excepción de prescripción extintiva de 5 años** contemplada en el artículo 2.515 del Código de Bello, sosteniendo que desde que se hizo exigible el derecho a indemnización hasta la fecha de notificación de la demanda--, hecho acaecido el día 1 de septiembre de 2023--, ha transcurrido con holgura dicho plazo, aun estimando la suspensión del plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. Refuerza su defensa, afirmando que el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existe tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad para el caso sub lite.

Sin perjuicio de lo sostenido por la parte demandada, a juicio de esta sentenciadora, la naturaleza de la acción pretendida excede con creces el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, por lo que será necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnarían con la obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de Derechos Humanos



Foja: 1

incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5°.

En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que, de ser aplicadas, permitirían eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado a las víctimas. Lo anterior, se aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que, de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así, que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los Derechos Humanos se encuentra en principios y normas del derecho internacional.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la Carta Política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

En suma y, a juicio de esta sentenciadora, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, por lo que se rechazará la excepción de prescripción extintiva deducida, tanto en su solicitud principal como subsidiaria.



Foja: 1

**OCTAVO:** Que, habiéndose desechado las excepciones opuestas, corresponde analizar el fondo de la acción deducida, esto es, la procedencia de indemnizar al demandante por el daño moral producido ocasión de los apremios ilegítimos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado, y en su caso, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose por cierto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada relativas al monto y naturaleza de la indemnización, así como a la improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el demandante.

**NOVENO:** Que, el asunto sometido a la decisión de este tribunal versa sobre el daño moral que habría sufrido el demandante a consecuencia de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, y la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por tales hechos, razón por la cual corresponde determinar, en primer lugar, la existencia de dicha responsabilidad.

En este sentido, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los Derechos Humanos y esenciales de diversas personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior, ha sido reconocido por diversos tribunales que en diversos fallos han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas cuyas ideas o actividades contravenían la ideología y órdenes impartidas por el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte.

A mayor abundamiento, tales hechos no han sido discutidos en este proceso por la partes, y por tanto, constituye un hecho pacífico, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito, y conforme al mérito del instrumento descrito en el numeral 17 del considerando tercero, al que se les otorga valor probatorio, según su naturaleza, no objetado ni impugnado, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra acreditado que el demandante fue víctima de torturas, vejámenes, y diversos maltratos cometidos por



Foja: 1

agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos.

Ahora bien, en cuanto a la imputación de responsabilidad estatal, a la luz de tales antecedentes, ésta se configura claramente, lo cual fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a la obligación de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y específicamente, lo preceptuado en su inciso final al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en las reparaciones simbólicas otorgadas por la Ley N°19.123, y otros cuerpos normativos al demandante de autos.

Así las cosas, es dable sostener que existió un hecho ilícito imputable al órgano estatal.

**DÉCIMO:** Que, sentado lo anterior, corresponderá pronunciarse sobre la existencia del daño moral que reclama el demandante en su libelo.

Que, en reiterada jurisprudencia, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha definido el daño moral como *la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.*

Que, en este sentido, de la prueba descrita, especialmente de los instrumentos signados con los numerales 1) al 15) del motivo tercero



**Foja: 1**

precedente, los cuales serán valorados conforme los artículos 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil y 1702 del Código Civil, se tendrá por establecido el daño del que fueron objeto las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, como de las que fue objeto el señor Ortega mientras se mantuvo en reclusión, y durante el régimen de facto.

En definitiva, mediante la prueba antes señalada y valorada en la manera señalada, especialmente del instrumento descrito en el numeral 17) del motivo tercero, correspondiente a la nómina elaborada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, será posible tener por establecido que don José Gabriel Ortega Soto fue calificado como víctima de detención, violencia y represión por los hechos que vivió a manos de Agentes del Estado de Chile, siendo registrado en dicha nómina con el N°17.558. Asimismo, se puede advertir del instrumento acompañado en folio 16 y 18, correspondiente al Oficio DSGT N°4792-17203, emitido por el Instituto de Previsión Social, que el actor de autos ha recibido beneficios por reparación de Leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), manteniendo una pensión actual de \$249.608.- (doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ocho pesos). En dicho aspecto, y aun cuando no se encuentran aparejados en autos, documentos referentes al daño moral del actor en específico, al haber sido reconocido como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, y de acuerdo con la restante prueba instrumental acompañada, se tendrá por igualmente acreditado que el demandante sufrió daño moral, afectándole los vejámenes sufridos de la forma en que se relata en los instrumentos acompañados, dada la especial entidad de las torturas aplicadas, siendo el daño sufrido consecuencia directa de la acción de los agentes del Estado.

**UNDÉCIMO:** Que, determinada tanto la existencia del hecho dañoso como la efectividad de haber sufrido el demandante daño moral, y el nexo causal entre ambos, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial lo que dice relación con las afecciones derivadas de la magnitud y circunstancias de los ilícitos cometidos. Sin embargo, extraña esta juez un informe relativo a los daños específicos del demandante, lo que hubiese permitido contar con criterios





Foja: 1

más definidos para fijar el quantum indemnizatorio, especialmente dado el relato de los hechos contenidos en la demanda y el elevado monto indemnizatorio pedido en el libelo.

De otro lado, cabe hacer presente que este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por el demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de éstos, encontrándose entre ellos quien acciona en estos autos.

Así las cosas, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a este demandante durante tan largo tiempo, corresponde ahora que le devuelva su amparo y morigere en cierta extensión los efectos perniciosos de su obrar, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

De esta forma, a la luz de los antecedentes que obran en autos y que fueron descritos y valorados con anterioridad, se fijará la indemnización de perjuicios en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), la que deberá pagar el Estado al demandante por concepto de daño moral.

Al respecto, cabe tener presente numerosa jurisprudencia reciente de nuestros Tribunales Superiores de Justicia que, sin ser vinculante para este tribunal, en circunstancias análogas, han fijado indemnizaciones de montos similares.

**DUODÉCIMO:** Que, la suma referida en el considerando precedente se pagará reajustada de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha en que quede firme esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto se acogerá la excepción deducida por la demandada. Junto a lo anterior, tal suma deberá pagarse aumentada con los intereses corrientes aplicados desde la fecha en que quede firme este fallo y hasta el pago efectivo de la indemnización, todo conforme a la liquidación que se practicará oportunamente en la Secretaría de este Tribunal.



Foja: 1

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en cuanto a las costas de la causa, cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la parte demandada.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1.700, 1.706, 1.71, 2314, 2.316, 2.329, 2.332, 2.492, 2.514, 2.515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

**I.-** Que, se **RECHAZA** la excepción de reparación integral del daño, opuesta por la demandada.

**II.-** Que, se **RECHAZA** la excepción de prescripción extintiva, tanto en su petición principal como subsidiaria, opuesta por la demandada.

**III.-** Que, se **ACOGE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida a folio 1 de autos por don **JOSÉ GABRIEL ORTEGA SOTO** y se condena a la demandada **FISCO DE CHILE** a pagar al demandante la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral, cantidad que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, y aumentada con los intereses corrientes, calculados ambos desde la fecha en que quede firme esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, todo según liquidación que se practicará en su oportunidad.

**IV.-** Que, **CADA PARTE** pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

C-12.761-2023.

Pronunciada por doña Lorena Isabel Cajas Villarroel, Juez Suplente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SCVMXXXTYBH

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, **dieciocho de Junio de dos mil veinticuatro**

